EXPEDIENTE: SUP-JDC-2307/2025

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA¹

Ciudad de México, **** de agosto de dos mil veinticinco.

Sentencia que, con motivo de la demanda presentada por **ELIMINADO. DATO PROTEGIDO**, **confirma** la resolución emitida por el **Tribunal Electoral de la Ciudad de México** que confirmó el acuerdo por el que se aprobó la asignación del cargo, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la entrega de constancia de mayoría a favor del candidato ganador de una Magistratura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES.....	2
II. COMPETENCIA.....	3
III. PROCEDENCIA.....	4
IV. ESTUDIO DE FONDO.....	5
V. RESOLUTIVOS.....	13

GLOSARIO

Actor:	ELIMINADO. DATO PROTEGIDO
Código Electoral:	Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
Constitución:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instituto local:	Instituto Electoral de la Ciudad de México.
JDC:	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
Ley Electoral:	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley de Medios:	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ley Orgánica:	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Responsable/ Tribunal local:	Tribunal Electoral de la Ciudad de México
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tribunal Electoral:	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹ **Secretariado:** Fernando Ramírez Barrios y Carlos Gustavo Cruz Miranda.

I. ANTECEDENTES

1. Proceso electoral local. El veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro, dio inicio el proceso electoral local extraordinario 2024-2025 para la elección de personas juzgadoras en la Ciudad de México.

2. Jornada electoral. El uno de junio dos mil veinticinco², se llevó a cabo la jornada electoral para la referida elección.

3. Resultados de los cómputos distritales. El ocho de junio, concluyó el cómputo de la señalada elección, en los consejos distritales del Instituto local.

4. Integración de los cómputos distritales por circunscripción y distritos judiciales electorales locales³. Se llevó a cabo la integración de los cómputos distritales por circunscripción y distritos judiciales electorales locales, entre otros, de la elección de una Magistratura **ELIMINADO. DATO PROTEGIDO**, en la cual, el actor obtuvo el segundo lugar de la votación.

5. Acuerdo del Instituto local. El dieciséis de junio, el Instituto local emitió el acuerdo⁴ mediante el cual aprobó la asignación del cargo, el cumplimiento de requisitos de elegibilidad y la entrega de constancia de mayoría a favor del candidato ganador, así como la declaración de validez de los comicios.

6. Juicio local. El veinte de junio, el actor presentó demanda para controvertir el Acuerdo, específicamente lo relativo a la elección de una Magistratura en Materia Civil en el 08 Distrito Judicial Electoral; reclamando la elegibilidad del candidato ganador de dicha elección por el supuesto incumplimiento del requisito relativo al promedio general mínimo de calificación en las materias de licenciatura relacionadas con el cargo por el cual se postuló, así como la validez de esta.

² En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veinticinco, salvo mención expresa.

³ Acuerdo IECM/ACU-CG-072/2025, de nueve de junio.

⁴ IECM/ACU-CG-073/2025.

7. Sentencia impugnada. El veintidós de julio, el Tribunal local determinó: A) Sobreseer la demanda presentada, por lo que hace a los planteamientos dirigidos a controvertir la falta de cumplimiento por parte del candidato electo, del requisito de elegibilidad consistente en gozar de buena reputación, y; B) Confirmar en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo impugnado, en lo concerniente a la elegibilidad del candidato ganador de la elección de una Magistratura **ELIMINADO. DATO PROTEGIDO** y la declaración de validez de tal elección.

8. Juicio Federal. Inconforme con esa sentencia, el veintitrés de julio, el actor presentó ante el Tribunal local demanda, la cual posteriormente fue remitida a la Sala Ciudad de México.

9. Consulta competencial. El veintisiete de julio, la Sala Toluca realizó consulta competencial, derivado de que la controversia involucra un asunto relacionado con la elección de magistratura en materia civil que integra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

10. Turno. La presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente **SUP-JDC-2307/2025** y turnarlo a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente⁵ para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en atención a la consulta competencial formulada por la Sala Toluca.

Al respecto, esta Sala Superior determina que es competente para conocer y resolver el presente juicio, toda vez que se trata de un medio de impugnación relacionado con el proceso de elección de una de las

⁵ Artículos 41, párrafo tercero, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución; 251, 253, fracción IV, inciso c), 256 fracción I, inciso e), y 267, fracción XVI, de la Ley Orgánica; así como 79, 80, y 83, párrafo 1, de la Ley de Medios.

Magistraturas del Poder Judicial de la Ciudad de México, que integra el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.⁶

Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 1/2025 relativo a la distribución de los asuntos que conocerá esta Sala Superior y las Salas Regionales, vinculados con personas juzgadoras de las entidades federativas.

III. PROCEDENCIA

El juicio de la ciudadanía satisface los presupuestos procesales y los requisitos de procedencia, de conformidad con lo siguiente:

1. Forma. En la demanda consta el nombre de quien la promueve; asimismo, se identifican los actos impugnados y la autoridad responsable, se precisan los hechos y los agravios materia de controversia, así como los preceptos supuestamente vulnerados.

2. Oportunidad. El juicio se promovió dentro del plazo previsto en la Ley de Medios⁷, pues la sentencia impugnada se emitió el veintidós de julio, mientras que la demanda fue presentada ante el Tribunal local el veintitrés de julio, por lo que resulta evidente que se interpuso dentro de los cuatro días naturales siguientes a aquel en que se tuvo conocimiento de ésta.

3. Legitimación e interés jurídico. El actor cumple con tales extremos, porque comparece por su propio derecho, además de ser parte actora de la instancia y controvierte la sentencia del Tribunal local, que por una parte sobreseyó la demanda y por la otra confirmó el acuerdo impugnado en lo referente a la elegibilidad del candidato ganador de la elección.

4. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que no se prevé algún otro medio de impugnación que deba ser agotado antes de acudir a esta instancia jurisdiccional.

⁶ Similar criterio se estableció al resolver el SUP-JDC-1487/2025.

⁷ Artículo 8, en relación con el 7, párrafo 1.

IV. ESTUDIO DE FONDO

1. Contexto de la controversia

La controversia tiene su origen en el Acuerdo del Instituto local, por el que se aprobó la asignación del cargo de una Magistratura en Materia Civil en el 08 Distrito Judicial Electoral, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la entrega de constancia de mayoría a favor del candidato ganador, así como la declaración de validez de la elección.

Dicho Acuerdo fue impugnado por el actor, quien obtuvo el segundo lugar de la votación para el mencionado cargo.

2. Sentido de la sentencia impugnada

En la resolución controvertida, el Tribunal local determinó:

A) Sobreseer la demanda presentada, por lo que hace a los planteamientos dirigidos a controvertir la falta de cumplimiento por parte del candidato electo, del requisito de elegibilidad consistente en gozar de buena reputación, ya que los planteamientos del actor ya fueron materia de estudio y pronunciamiento en la sentencia local recaída a distinto juicio electoral⁸.

B) Confirmar en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo impugnado, en lo concerniente a la elegibilidad del candidato ganador de la elección de una Magistratura **ELIMINADO. DATO PROTEGIDO** de la Ciudad de México y la declaración de validez de la elección.

Lo anterior, porque consideró que el agravio planteado el actor es inoperante, porque parte de la premisa errónea de sostener, que incumbía al Consejo General del Instituto local revisar que el candidato ganador cumplió con el requisito de elegibilidad concerniente a la acreditación de un promedio mínimo de nueve en las asignaturas que cursó solamente durante la licenciatura, relacionadas con la materia de

⁸ TECDMX-JEL-138/2025, resuelto el dieciséis de julio.

Derecho Civil, al aspirar a una Magistratura que impartirá justicia especializada en esa rama del Derecho.

La responsable argumentó que el actor pierde de vista que el requisito de elegibilidad fue revisado y tenido por satisfecho por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, pues fue el que aprobó la postulación del candidato ganador con base en que los artículos 95, fracción III, y 122, apartado A, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución General — relativos a los requisitos para que una persona sea electa como ministra de la Suprema Corte, pero aplicables también para quienes aspiran a una magistratura del Tribunal Superior de Justicia— disponen que el referido promedio mínimo de nueve, puede provenir de materias cursadas no solo durante la licenciatura, sino también, al estudiarse una especialidad, maestría o doctorado.

Razonó que en el expediente consta una copia certificada, emitida por la Dirección General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, del historial académico a nombre del ganador de la elección, correspondiente a la especialización en Derecho Civil, impartida por la Facultad de Derecho de dicha institución, observándose en ella que el promedio obtenido por esa persona, al cursar la especialización en cuestión, fue de nueve punto sesenta y siete.

Dicha constancia sirvió de sustento a la responsable para concluir la existencia de una presunción sobre el cumplimiento del requisito de elegibilidad materia de controversia, que, para ser desvirtuada, la parte actora debió aportar pruebas fehacientes que derrotaran la conclusión asumida por el Comité de Evaluación, al postular al candidato ganador.

3. Planteamientos de la parte actora

El actor expresa esencialmente lo siguiente:

- La sentencia incumple con los principios de exhaustividad y congruencia porque omite considerar todos los instrumentos, referentes y estándares internacionales, **desde** la óptica de derechos humanos y

contradice el espíritu del órgano reformador de la Constitución, interpretado progresiva e íntegramente respecto del requisitos de gozar de una buena reputación y no haber sido condenado por algún delito de los señalados en los artículos 95, fracción IV y 97, fracción III constitucionales.

Lo anterior porque la buena reputación no depende necesariamente de la existencia de una sentencia definitiva ejecutoriada que condena a la persona candidata a cualesquiera de los delitos referidos en la normatividad constitucional, ya que la buena reputación es de naturaleza social moral.

Po ello, considera que las pruebas para desvirtuar la presunción de buena reputación son diversas y variadas y el Tribunal local debió recabar la carpeta de investigación, el juicio civil y el juicio familiar que ofreció como prueba.

- Es inconsistente que el Tribunal local haya determinado que no se revierte la carga de la prueba al candidato ganador para demostrar que respondió a las imputaciones mediáticas y legales que le hicieron, por que consideró que corresponde a quien cuestionaba la buena reputación demostrar sus afirmaciones.

- El Tribunal local aplicó de manera incorrecta el artículo 97, fracción II de la Constitución, porque si bien, conforme a las disposiciones constitucionales y legales, el proceso electoral, entre sus etapas contó con una convocatoria, en la cual el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo incluyó al candidato impugnado por considerarlo elegible, ello no significa que el Tribunal local o el Instituto local carezcan de facultades o el deber de analizar y en su caso, confirma o modificar la elegibilidad de algún candidato.

Argumenta que de las materias que cursó en la licenciatura, vinculadas con la materia civil, el candidato ganador obtuvo en promedio una calificación de ocho punto siete, la cual es inferior a la mínima de nueve, establecida constitucionalmente.

4. Determinación

La sentencia impugnada debe **confirmarse**, ante lo infundado de los planteamientos del actor, porque la autoridad responsable fue exhaustiva; además fundó y motivó debidamente la sentencia al señalar los preceptos jurídicos y jurisprudencia aplicable que establecen el procedimiento que rige la elección extraordinaria de personas juzgadoras en la Ciudad de México

Lo anterior, a partir de un análisis conjunto de los argumentos expuestos por la parte actora, sin que ello le pueda causar afectación alguna.⁹

a) Incumplimiento del requisito de elegibilidad relativo a que el candidato ganador cuente con buena reputación.

Marco jurídico

Esta Sala Superior ha considerado que al momento de expresar agravios la parte promovente no está obligada a manifestarlos bajo una formalidad o solemnidad específica, ya que simplemente basta con la mención clara de la causa de pedir o un principio de agravio en el que se confronte lo considerado en el acto impugnado.

Sin embargo, lo que sí es imprescindible, es la precisión del hecho que le agravia y la razón concreta por lo que lo estima de esa manera. De manera que, cuando se presente una impugnación, la parte demandante tiene el deber mínimo de confrontar y cuestionar lo determinado en la resolución intermedia; esto es, se deben combatir las consideraciones que la sustentan.

Ello, sin que resulte suficiente aducir argumentos genéricos o imprecisos, sin combatir las consideraciones medulares de la autoridad responsable para determinar la existencia de las conductas denunciadas.

⁹ Al respecto, véase la jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

Caso concreto

Es **infundado** que la sentencia del Tribunal local adolezca de falta exhaustividad al haber sobreseído el juicio local, en lo relativo exclusivamente a los planteamientos de la demanda dirigidos a controvertir la falta de cumplimiento por parte del candidato ganador, del requisito de elegibilidad consistente en gozar de buena reputación.

Lo anterior al ser un hecho notorio para ese órgano jurisdiccional que los planteamientos ya habían sido materia de estudio y pronunciamiento en diverso juicio electoral¹⁰, por lo que le era jurídicamente

Por ello, esta Sala Superior coincide en que el actor agotó su derecho de acción con la presentación de diversa demanda¹¹ en la que de igual forma controvertió el mismo acuerdo del Instituto local¹² y manifestó agravios esencialmente coincidentes.

De allí lo infundado de los planteamientos del actor, por lo que es procedente **confirmar** la determinación del Tribunal electoral.

b) Falta de cumplimiento del requisito de elegibilidad referente a un promedio mínimo de nueve en las materias relacionadas con el cargo para el cual contendió el ganador.

Se debe **confirmar** la sentencia impugnada porque la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una cuestión técnica que corresponde a los Comités de Evaluación, quienes en su oportunidad valoraron el cumplimiento de ese requisito, de conformidad con la metodología que establecieron en la convocatoria respectiva sin que se justifique que el Instituto ni el Tribunal locales lleven a cabo una nueva revisión.

¹⁰ **ELIMINADO. DATO PROTEGIDO.**

¹¹ Que dio origen al mencionado **ELIMINADO. DATO PROTEGIDO.**

¹² IECM/ACU-CG-073/2025.

Marco normativo

El Código Electoral de la Ciudad de México, establece que el proceso electoral de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México es el conjunto de actos, ordenados por la Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código, y las normas que emita el Instituto Electoral realizado por las autoridades electorales, los Poderes Públicos de la Ciudad de México, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de las personas juzgadoras¹³.

En ese sentido, prevé que cada Poder de la Ciudad de México instalará un Comité de Evaluación a través de los mecanismos que determinen dentro de los treinta días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria que emita el Congreso.

Las facultades previstas en el Código Electoral para Comités de Evaluación de cada poder son: I. **Verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas aspirantes**; II. Seleccionar los perfiles mejor calificados para ocupar los cargos de elección del poder Judicial, observando los principios de paridad de género, inclusión, accesibilidad, profesionalismo, ética y transparencia; III. Llevar a cabo la insaculación para determinar a las personas que participarán como candidatas a los cargos de elección del Poder Judicial; IV. Proponer al Pleno del Congreso a las Personas candidatas a los cargos de elección popular del Poder Judicial¹⁴.

Una vez que los comités hayan recibidos los expedientes, los Comités integrarán la lista de las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria y reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, sin que puedan exigirse requisitos adicionales a los establecidos en la Constitución Federal, Ley General, Constitución Local, Ley de la materia y en el Código Electoral¹⁵.

¹³ Artículo 464.

¹⁴ Artículo 468.

¹⁵ Artículo 468

Posteriormente procederán a calificar la idoneidad y realizarán un proceso de depuración mediante insaculación pública, publicaran los resultados y los remitirán a cada Poder para su aprobación¹⁶.

Los listados que hayan aprobados los Poderes de la Ciudad de México serán remitidos al Congreso en el mes de febrero del año de la elección que corresponda, en los términos establecidos en la convocatoria, acompañados de los expedientes que acrediten la elegibilidad e idoneidad de las personas postuladas. Las autoridades que no remitan postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria respectiva estarán impedidas para hacerlo posteriormente¹⁷.

Caso concreto.

Son **infundados** los planteamientos del actor, ya que ni el Instituto ni el Tribunal locales tenían la facultad para revisar de nueva cuenta el requisito de elegibilidad consistente en que el candidato ganador haya obtenido la calificación mínima de nueve en las materias afines al cargo por el que compitió.

Lo anterior, porque la valoración de las materias correspondientes a la especialidad es una cuestión técnica que corresponde a los Comités de Evaluación, en concordancia con las respectivas convocatorias.

En ese sentido, la facultad del Instituto local para verificar los requisitos de elegibilidad de las candidaturas no es absoluta, ya que no tiene atribuciones para revisar requisitos cuya valoración fue delegada a un órgano técnico como lo es la calificación de nueve puntos en materias afines al cargo para el que se postuló el candidato ganador.

En el caso, el Comité de Evaluación ya había determinado las candidaturas que cumplieron con el requisito de contar con una

¹⁶ Artículo 468.

¹⁷ Artículo 469.

calificación mínima de nueve, relacionadas con la especialidad del cargo al que se postularon.

Por ello, la pretensión de que se verifique de nueva cuenta el requisito, para lo cual tendría que emplearse una metodología creada con posterioridad, puede afectar los principios de legalidad, certeza y definitividad, que exigen que las reglas de participación en la elección de juzgadores sean previas a que la ciudadanía emita su voto.

Además, esta Sala Superior coincide con el razonamiento del Tribunal local, en el sentido de que el actor parte de una premisa errónea, al considerar que el promedio mínimo de nueve debía acreditarse con las asignaturas cursadas en la licenciatura.

Ello, porque el Órgano Reformador de la Constitución únicamente fijó el umbral, pero dejó abierta la manera de integrarlo, al indicar que puede provenir de la licenciatura o de un posgrado¹⁸, por lo que la identificación de las asignaturas afines es una tarea encomendada a los Comités, por lo que una vez que declararon cumplido el requisito y remitieron los listados a los Poderes de la Ciudad de México y estos al Congreso local, el cumplimiento del requisito de elegibilidad quedó agotado.

Esta Sala Superior también ha determinado¹⁹, que el promedio de nueve debe obtenerse como media aritmética de todas las materias relacionadas con la especialidad y admite su acreditación con estudios de posgrado afines. Asimismo, este órgano jurisdiccional ha considerado que los Comités de Evaluación cuentan con facultades discrecionales y las autoridades electorales no pueden tener injerencia en aspectos técnicos²⁰.

De allí lo **infundado** de los argumentos planteados por el actor.

Por lo expuesto y fundado, se dictan los siguientes:

¹⁸ Artículo 95, párrafo III de la Constitución General.

¹⁹ Al resolver el juicio SUP-JDC-18/2025.

²⁰ SUP-JDC-1158/2024 y acumulados y SUP-JDC-41/2025 y acumulados.

V. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Esta Sala Superior es **competente** para conocer del presente medio de impugnación.

SEGUNDO. Se **confirma** la sentencia impugnada.

TERCERO. Se ordena comunicar la presente determinación a la Sala Regional Ciudad de México, en atención a la consulta competencial planteada.

Notifíquese como en derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido y, en su caso, devuélvase la documentación atinente.

Así, por **unanimidad** de votos, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe, así como de que la presente ejecutoria se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

NOTA PARA EL LECTOR

El presente proyecto de sentencia se publica a solicitud del magistrado ponente, en términos del Acuerdo General 9/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos para la publicación de los proyectos de resolución por parte de los integrantes del Pleno de las Salas de este Tribunal Electoral.